



REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

Auto interlocutorio	388
Radicado	052663103001-2020-00163-00
Proceso	Verbal (Responsabilidad Contractual)
Demandante (s)	Ángela Velandia
Demandado (s)	Apic de Colombia S.A. y otros
Asunto	Declara falta de competencia para conocer demanda y ordena remitirla al centro de servicios administrativos

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO

Diez de noviembre de dos mil veinte

Atendiendo al escrito de subsanación de la demanda formulada por Ángela Velandia contra APIC de Colombia S.A.S., Edificaciones Urbanas S.A.S., Alina María Pérez Ortega, Jorge Alonso Herrera y Maritza Hernández y Jorge Andrés Herrera, como fideicomitentes- beneficiarios, Acción Fiduciaria S.A., como vocera y administradora del Fideicomiso Recurso Vista y en responsabilidad extracontractual contra ITAU Corpbanca Colombia S.A, se observa que se carece de competencia para asumir el conocimiento.

CONSIDERACIONES:

1. Bien es sabido que la competencia es la reglamentación del ejercicio de la función jurisdiccional, particularmente; la doctrina nacional ha considerado que ésta es la facultad que cada juez tiene para ejercer jurisdicción en determinados asuntos, respecto de determinados sujetos, en una cuantía y en un territorio determinado¹.

Con ocasión de tal reglamentación, es que el ordenamiento jurídico prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quien corresponde tramitar el asunto, ya la Sala de Casación Civil de la Corte

¹ Luis Alonso Rico Puerta, Teoría General del Proceso, Pág. 355, Editorial Leyer, 2013, Bogotá

Suprema de Justicia, ha dicho que estos aluden a la clase o materia, cuantía del proceso, calidad de las partes, naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal².

2. Para el caso en concreto, importan los factores objetivo y territorial, los cuales pasan a ser objeto de verificación.

2.1. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha explicado que el factor objetivo, atiende, por un lado, a la naturaleza del asunto, esto es, “...a la materia específica del litigio, con independencia de la valoración económica en torno a lo pretendido...”³, y por otro lado, “...al valor o estimación económica de las pretensiones debatidas, verbigracia, lo relativo al cobro de obligaciones pecuniarias, que en el procedimiento civil se clasifican en asuntos de mayor, menor y mínima cuantía...”⁴.

En el caso particular, si bien el *petitum* de la demanda, gira en torno del negocio jurídico “Contrato de Vinculación N° 1300036765”, no debe perderse de vista que la indemnización pretendida con ocasión de la responsabilidad contractual, se circunscribe a los perjuicios que se ocasionaron con la celebración de éste, los que de acuerdo a las pretensiones formuladas ascienden a la suma de \$112.553.426; la que sirve de pauta para fijar la competencia por el factor objetivo, toda vez que la cuantía se refiere es “...*al valor o estimación económica de las pretensiones debatidas verbigracia, lo relativo al cobro de obligaciones pecuniarias, que en el procedimiento civil se clasifican en asuntos de mayor, menor y mínima cuantía...*”⁵.

Así las cosas, como el factor objetivo se determina por la cuantía, ya que asunto no está atribuido a ningún juez en particular, y, el valor de todas las

² AC7913-2017.

³ Auto AC 2057 de 2017.

⁴ Ídem.

⁵ Ídem.

pretensiones es inferior a 150 s.m.l.m.v., pero, superior a 40 s.m.l.m.v., puesto que lo pretendido en la indemnización de los daños más no la resolución del contrato, por lo tanto, es la suma descrita en el párrafo anterior siendo el proceso de menor cuantía; por lo que la controversia corresponde conocerla al juez de categoría municipal –artículo 25 del C. G del Proceso, en concordancia con el 18, numeral 1, *ídem*-.

2.2. Por otra parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, tiene sentado que la competencia territorial “...sirve para asignar la competencia a los jueces según la distribución geográfica de la administración de justicia...”⁶; para tal propósito, el ordenamiento estipuló los denominados fueros, los cuales se relacionan con el derecho de defensa y el objeto instrumental del proceso, y, dentro de los cuales se encuentran “...el domicilio o lugar de ubicación del demandado, el lugar de cumplimiento de las obligaciones del negocio jurídico en cuestión, la ubicación de los bienes objeto de disputa...”⁷, entre otras.

En este caso, existe concurrencia de fueros, ya que el demandante podía acudir al domicilio del demandado⁸, o, al lugar de ocurrencia de los hechos⁹ –o al de celebración del negocio jurídico¹⁰, artículo 28, numerales 1, 3 y 6, del C. G. del Proceso-, empero, como lo refirió en el acápite de competencia, eligió el “lugar de domicilio del demandado Apic de Colombia S.A.S.”, el cual, según certificado de existencia y representación corresponde a este municipio, así las cosas, es el juez con competencia en esta municipalidad el competente por el factor territorial, dado que la elección de quien ejerce el derecho de acción es de carácter obligatorio, tal como lo tiene sentado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la que refirió que “*suficientemente conocido es que cuando existen fueros concurrentes dentro del factor territorial, la competencia se determina por la elección del demandante,* quien es el único

⁶ *Ídem*.

⁷ *Ídem*, y, artículo 28 del C. G. del Proceso.

⁸ Indica que acude al domicilio de la Sociedad Apic de Colombia por tener esta el domicilio en esta localidad.

⁹ En el caso de la Responsabilidad Extracontractual pretendida contra Banco Itaú.

¹⁰ En la responsabilidad Contractual en contra de la Sociedad Apic de Colombia.

facultado por la ley para hacer la escogencia respectiva dentro de las posibilidades que le brinda la ley...”¹¹.

2.3. Conjugados estos factores, se tiene que el competente para conocer el mencionado proceso es el Juez Civil Municipal de Oralidad de esta localidad.

Motivos estos que implican que la consecuencia jurídica para este estado de cosas, es declarar la falta de competencia para conocer el referido litigio, y ordenar la remisión del expediente a quien es competente, tal como lo consagra el art. 90 *ídem*.

En razón de lo expuesto, el Juzgado

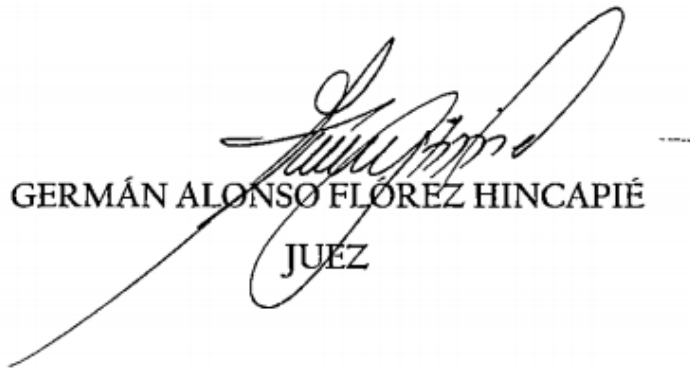
RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la falta de competencia para conocer de esta demanda de Ángela Velandia contra APIC de Colombia S.A.S., Edificaciones Urbanas S.A.S., Alina María Pérez Ortega, Jorge Alonso Herrera y Maritza Hernández y Jorge Andrés Herrera, como fideicomitentes- beneficiarios, la sociedad Acción Fiduciaria S.A., como vocera y administradora del Fideicomiso Recurso Vista, y en responsabilidad extracontractual, contra ITAU Corpbanca Colombia S.A.

SEGUNDO: Disponer su remisión al Centro de Servicios Administrativos para que sea repartida entre los Juzgados Civiles Municipales de Oralidad de esta localidad.

¹¹ Auto AC 6076 de 2016.

NOTIFÍQUESE



GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ
JUEZ

12

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado No. 090, fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a las 8 am

Envigado, Noviembre 11 del 2020



Tatiana Corrales Ramírez
Secretaria